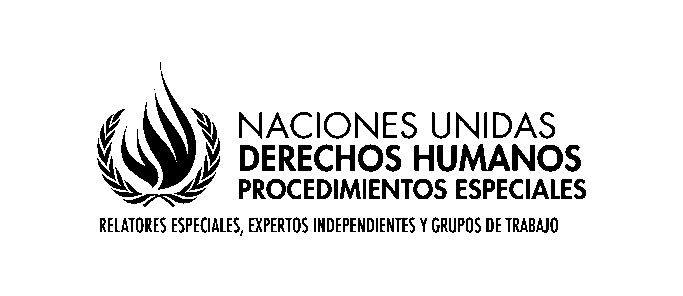
****

**Cuestionario para pueblos Indígenas y sociedad civil**

**1.-** El viernes 19 de marzo de 2021, en el norte de Puerto Saavedra, sector Calof, región de La Araucanía, Chile, 14 comunidades Mapuche (más de 1.500 personas), fueron afectadas dada la fumigación aérea realizada por el particular Andrej Konstantin Ostojic (Servicios Aeronáuticos E.I.R.L), a solicitud de los dueños del predio propiedad de la Sociedad Agrícola y Ganadera Rucalán SPA, (cuyos dueños son Luciano Landerretche Maffei, Arline Landerretche Maffei y Luciano Landerretche Jiménez). Dada la velocidad del viento, la deriva de la carga de los químicos utilizados en la fumigación se extendió por kilómetros, dañando suelos, alimentos, fuentes de agua, huertos y cultivos familiares y comunitarios, bosque nativo, pastizales, fauna, polinizadores, apicultura, y plantas medicinales, entre muchos otros.

El producto que la empresa aérea declaró al Servicio de Salud Araucanía, del Ministerio de Salud del gobierno de Chile, para la fumigación del predio fue el insecticida "Karate con tecnología Zeón", cuyo principio activo es Lambda Cihalotrina, utilizado para el control de larvas e insectos, sin embargo, dado el daño ambiental, especialistas señalan sus dudan respecto a que el químico arrojado corresponda efectivamente al declarado. A pesar de la denuncia realizada a distintos Servicios gubernamentales, no hubo sanción, responsables, ni reparación del daño causado. Con la fumigación realizada, las comunidades Mapuche perdieron todo el esfuerzo de un año de plantación, afectando económica, social y ambientalmente a las familias. Desde el ministerio de Salud, señalaron que la fumigación se realizó de acuerdo a reglamento sanitario.

La segunda semana de noviembre de 2021, en sector Popoen, San Juan de la Costa, región de Los Lagos, Chile, la Forestal Anchile S.A, empresa japonesa dedicada a la forestación y explotación de plantaciones forestales (en Chile de monocultivos de pino y eucalipto principalmente), realiza una fumigación en predio arrendado a particular, para la posterior plantación de eucaliptus. La fumigación realizada, según denuncian, contaminó caudales de agua, afectando a aproximadamente sesenta personas integrantes de dos comunidades indígenas Mapuche Huilliche: la Comunidad indígena de Popoen y la Comunidad Mapu Lafken.

Con ello, las comunidades denuncian que se contaminaron cursos de agua destinadas a consumo humano y animal, produciendo afectaciones a la salud humana, entre ellas vómitos, diarrea, dolor estomacal como asimismo a la salud ambiental: la muerte de animales, y el secado de humedales rurales indispensables para la protección de la biodiversidad en la zona, entre otros.

Se desconoce el químico arrojado. Las comunidades organizadas, realizaron la denuncia al municipio local de San Juan de la Costa, sin a la fecha haber recibido respuesta o sanción a la empresa aludida. De misma forma, denuncian que les realizaron exámenes de sangre tardíos y que el laboratorio que analizó las posibles aguas contaminadas, no tiene la capacidad de análisis de parámetros químicos-plaguicidas.

Cabe mencionar que, en anterior ocasión, en abril de 2020, las comunidades denunciaron la muerte de loros Choroy, endémicos y protegidos de bosques del Sur de Chile/Argentina. Las investigaciones realizadas para el caso por el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, demostraron la presencia de carbamatos, que, como muchos otros plaguicidas, pueden ser absorbidos de forma cutánea, digestiva y respiratoria, tanto por seres humanos como animales, afectando seriamente la salud de todo ser vivo, así como el equilibrio y sustentabilidad de los ecosistemas.

Tanto para los casos en sector Calof, Región de La Araucanía, como en Popoen, San Juan de la Costa, no hubo una respuesta efectiva ni oportuna por parte del gobierno y empresas en beneficio de las comunidades afectadas.

**2.-**En ambos casos mencionados, las comunidades indígenas vieron afectados su derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al derecho a la consulta libre, previa e informada respecto a afectaciones administrativas susceptibles de afectarles directamente; el derecho a decidir sobre prioridades que atañen su desarrollo, (art. 7 OIT), en tanto las fumigaciones afectan directamente su bienestar social, territorial, económico, cultural.

Las fumigaciones afectan las condiciones de vida, trabajo, salud y educación que señala el ART 7.2 OIT sobre “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan”.

De la misma forma, afectan el artículo 7. 3 de la OIT que señala que: *“Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.*

Al respecto, es necesario señalar que, por parte de las comunidades indígenas afectadas, existe una enorme desconfianza a la institucionalidad estatal encargada de fiscalizar y sancionar, dada la lentitud, pasividad y la escasa acción y apoyo ante las denuncias realizadas, especialmente, según denuncian, por anteponer los intereses del empresariado, por sobre la salud humana de las comunidades afectadas. Por otra parte, en Chile la legislación respecto al tema es deficiente, amplia y permite la fumigación con sustancias tóxicas alrededor de comunidades Mapuche,sin respetar sus derechos colectivos e individuales, sin informar previamente a los/as afectados/as. En tanto, la regulación en Chile es deficiente, y permite el uso de químicos plaguicidas prohibidos en países de la Unión Europea, a pesar de sus reconocidos efectos e impactos negativos a la salud humana y medioambiental.

Por otra parte, el gobierno de Chile no respeta el art. 7.4 de la OIT, que señala que: “ Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan” y de misma forma, no se está aplicando el principio precautorio, el cual está consagrado en la "Declaración de Río" por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, junto a una serie de principios esenciales para el desarrollo sostenible.

**3.-**No, dado que las regulaciones respecto al uso y aplicación de pesticidas en Chile, entre ellas el decreto 158 que aprueba el reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas; la resolución 1055 exenta que autoriza plaguicidas para uso especial en aeronaves; el decreto de ley 3557 que establece disposiciones sobre protección agrícola del ministerio de agricultura y el decreto 5 aprueba reglamento sobre aplicación aérea de plaguicidas del Ministerio de salud; subsecretaría de salud pública, no consideran a los Pueblos Indígenas.

A pesar de que Chile ha suscrito y ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el país no se consulta, ni se informa previamente a los Pueblos indígenas respecto a las consecuencias de las aplicaciones tóxicas en los territorios.

Por otra parte, cabe destacar que en el caso de las comunidades Mapuche afectadas en Popoen, San Juan de la Costa, X región, existía un acuerdo previo entre Forestal, Municipio y Comunidades de no fumigación en el territorio, sin embargo, la empresa no respetó el acuerdo mencionado.

Con todo esto, el Estado no considera de modo alguno consideraciones especiales respecto a los Pueblos Indígenas, y las comunidades Mapuche afectadas no son consultadas previamente de medidas que afectan el área circundante a su territorio, aun cuando existe directa exposición a sustancias tóxicas que les afecten, dañando con ello su bienestar social, cultural, territorial y económico.

**4.-** En general, no existe un diálogo respecto a las consecuencias del uso de pesticidas con comunidades indígenas.

Para el caso de las comunidades Mapuche afectadas en sector Popoen, existía un acuerdo previo entre la Forestal Anchile, autoridades locales y comunidades indígenas de no fumigación (dada una previa fumigación que generó la muerte de animales y loros Choroy en el sector), sin embargo, el acuerdo no se respetó.

**5.-** Las comunidades Mapuche afectadas en el sector Calof, Puerto Saavedra, presentaron un recurso de protección contra quienes resulten responsables ante el daño ocasionado en el territorio. Sin embargo, no hubo una respuesta favorable ante ello, ya que, existió el déficit de elementos técnicos y peritajes científicos para demostrar la contaminación.

Las comunidades Mapuche afectadas en sector Popoen se encuentran en proceso de realizar acciones legales, sin embargo, en ambos casos, existe dificultad de acceso a la justicia, dado que se requiere de recursos económicos para costear abogados, toma de muestras independientes, entre otros.

Por otra parte, las comunidades Mapuche tanto en sector Calof como en Popoen, han realizado la denuncia de sus respectivos casos en medios de comunicación, tanto para denunciar a las empresas e inacción gubernamental como para concientizar sobre el tema.

En ambos casos las atribuciones administrativas no están enfocadas en la protección de los pueblos indígenas. La presentación de pruebas técnicas no es apoyada por los organismos estatales, quienes no ofrecen defensoría pública, ni apoyan la investigación desde el punto de vista estatal.

**6.-** Los principales retos están relacionados con: 1) Fortalecimiento del marco de regulación. Por una parte, los sistemas de regulación en Chile son proclives a la utilización de sustancias tóxicas que se encuentran prohibidas en países donde prima el principio de precaución. Se requiere una revisión de la legislación bajo los principios de protección del medio ambiente y la salud humana. 2) Incremento de los equipos de fiscalización: los organismos de fiscalización son completamente insuficientes, y no cuentan con la infraestructura y recursos necesarios para velar por la salud de las personas; 3) Regular los procesos de aprobación de sustancias tóxicas: la legislación es bastante flexible y aún considera, pese a las condiciones topográficas de Chile, la utilización de fumigaciones aéreas. 4) Consulta indígena: La consulta indígena debe ser considerada y desarrollada como una instancia resolutiva y vinculante respecto a la contaminación ambiental y/o ante potenciales afectaciones a sufrir por parte del uso de sustancias tóxicas; 5) Desarrollo de espacios comunitarios de educación y concientización: el desafío es potenciar los espacios de diálogo y de reflexión respecto a los efectos de los plaguicidas, así como de los procedimientos y protocolos disponibles por la institucionalidad en salud y medio ambiente. 6) Generar y potenciar programas de desarrollo de alternativas agroecológicas y centradas en los conocimientos ancestrales del pueblo Mapuche en el manejo de sus siembras, huertas y viveros; 7) Promover una legislación fundada en la protección de los derechos de los pueblos indígenas que viven en zonas con alta exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos.

**7.-** Ninguna. No existe obligatoriedad de desarrollar este tipo de educación. La educación desarrollada está orientada hacia la adaptación de los pueblos indígenas a las condiciones de exposición. En el caso de Calof, no vemos ningún tipo de interlocución entre la empresa y las comunidades mapuche. En el caso de Popoen, hay un acuerdo que es vulnerado por la empresa.

**8.-** Ninguna. Si bien Chile ha reconocido el Convenio No. 169 de la OIT (2008), no existe una legislación de acorde la protección de los pueblos indígenas en esta materia, lo cual ha supuesto diversas críticas frente a las consecuencias económicas, medioambientales, sociales, etc., de proyectos extractivos y la persistencia de sus asentamientos en territorios indígenas.

**9.-** No. No existe. El Ministerio de Salud sólo produce informes de diagnóstico sobre la “Salud de los Pueblos Indígenas de Chile”, sin tener una línea de medición sobre las situaciones de exposición a sustancias tóxicas.

<https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/09/ANEXO-07.pdf>

**10.-**Si bien en Chile existe un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas, este está enfocado en trabajadores expuestos a pesticidas, y no existe una normativa o regulación especial respecto a la atención a Pueblos Indígenas ante la exposición a sustancias tóxicas.

Por otra parte, se encuentra la Norma técnica de Vigilancia de intoxicaciones Agudas por plaguicidas (REVEP), pero no considera a la población de pueblos indígenas. La información: 1) No se encuentra en ninguna de los 6 idiomas indígenas hablados en el país; 2) No se socializa hacia las comunidades indígenas; 3) Las comunidades no participaron, ni fueron consultadas en el diseño de la norma; y 4) No hay estudios que alimenten cambios y reformas en esta materia.

**11.-**Existe la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19300). En ella se señala a los Pueblos indígenas como parte de los procesos de evaluación ambiental a través de la formación de una Consulta Indígena.

Además existe la ley Lafkenche (Ley 20.249/2008) que reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, caracterizados por el uso ancestral de los recursos marinos que conforman la base de su estructura social y prácticas culturales. No se trata sobre la materia específica señalada.

**12.-**No existen recursos disponibles enfocados particularmente hacia Pueblos indígenas expuestos a sustancias tóxicas, por tanto, los desafíos en la materia es en que en Chile se avance en un enfoque integral, multidisciplinario, pertinente económica, cultural y territorialmente: 1) Consulta previa, libre, informada y vinculante respecto al uso de plaguicidas en territorios (y territorios circundantes) a comunidades indígenas; 2) Políticas públicas y legislación especial y pertinente enfocada en los derechos de los Pueblos Indígenas. 3) Normativa más estricta respecto al uso de pesticidas en Chile, dado que se utilizan pesticidas prohibidos en otros países (principalmente en la Unión Europea) dadas sus conocidas consecuencias para la salud humana y ambiental. 4) Financiamiento a organizaciones de pueblos indígenas, sociedad civil y movimientos sociales con motivo de realizar campañas informativas y de visibilización de problemáticas asociadas a las consecuencias del abuso de pesticidas. 5) Trabajo intersectorial e interinstitucional vinculante entre organismos en base a objetivos comunes tendientes al resguardo de los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas. 6) Educación focalizada en prevención y en denuncia ante afectaciones por plaguicidas y sustancias tóxicas. 7) Campañas destinadas a la promoción de alternativas al uso de pesticidas. 8) Salud oportuna y pertinente culturalmente ante exposición a plaguicidas; 9) Fiscalización activa a empresas y particulares. 10) Mayores sanciones ante afectaciones a comunidades indígenas; acceso por parte de los Pueblos Indígenas afectados a reparación ante daños ocasionados por pesticidas; 11) Acceso y ejercicio a autonomía y libre determinación para los pueblos indígenas respecto a toda afectación o daño en el territorio, entre otros.

Por tanto, los desafíos para obtener recursos en el país, son el respeto irrestricto a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, como asimismo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y el desarrollo de políticas públicas pertinentes culturalmente, enfocadas en abarcar integralmente los derechos de los pueblos indígenas.